

Los referentes y los retos para América Latina en el siglo XXI*

Isabel Jaramillo Edwards, Investigadora del Centro de Estudios sobre América

Introducción

Este trabajo es una aproximación a América Latina en la década de 1970, con algunas referencias al Chile de la Unidad Popular y a la política de los Estados Unidos en ese momento. Luego, nos referiremos al contexto interamericano actual para acercarnos a algunas similitudes que se derivan del contrapunteo de estos temas, particularmente en cuanto a los métodos de la política exterior de los Estados Unidos en este ámbito.

El recurso del método: los Estados Unidos y América Latina

La reorganización del panorama global en términos geoeconómicos y la globalización son un hecho. El problema es las características con que se desarrolla, donde se tiende a dificultar la inserción de los países menos desarrollados. La influencia de la hegemonía, la geopolítica y el unilateralismo, deben ser considerados en este contexto. El paisaje internacional está experimentando un período de transición generalizada, con la convergencia, entre otros, de una tendencia a la multipolaridad, unipolaridad militar, globalización con la resultante interdependencia creciente (globalismo en las áreas económicas, militar, ambiental, social y cultural), una tercera revolución tecnológica en un ambiente interdependiente y transnacionalizado, la inmediatez de las comunicaciones y el resurgimiento de conflictos que, aunque latentes, no afloraban a la superficie en el contexto bipolar. Además, hay una lucha por la inserción en espacios geoeconómicos y geopolíticos, en un mundo marcado por la multidimensionalidad y una inseguridad penetrante, que resulta de una creciente complejidad e incertidumbre. La deceleración de la economía global y la crisis financiera son partes del panorama mundial, en el cual, los Estados Unidos redefinen sus intereses de seguridad y sus prioridades en el exterior.

La incertidumbre que surge de un contexto internacional en transición se refleja en las relaciones interamericanas, tradicionalmente caracterizadas por el limitado interés de los Estados Unidos en el continente y por una política que está determinada por las crisis. Sobre la base de la geopolítica, la Cuenca del Caribe —a causa de su proximidad geográfica y niveles de interdependencia— será una

* Ponencia (DRAFT) presentada en III Seminario Internacional “Problemas Globales que Afectan la Seguridad de la Humanidad”, CEID, Ciudad de La Habana, 19 al 21 de octubre de 2005.

prioridad, mientras en el Cono Sur que ha sido temporal —y relativamente menos significativo— adquiere nueva relevancia.¹

Nos encontramos frente a un nuevo ciclo de hegemonía de los Estados Unidos, y frente al desarrollo de una nueva arquitectura global.² En este marco cabe considerar hitos como los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la estrategia preventiva diseñada desde la Administración de G.W. Bush, Afganistán y la guerra de Irak, la vulneración del derecho internacional y la construcción de una nueva arquitectura global, en un mundo que tiende al multipolarismo pero caracterizado por el unipolarismo militar, y una dinámica internacional en la cual lo que prima son los intereses *ad-hoc*, los intereses de cada uno.

La nueva dinámica de seguridad nacional estadounidense, el unipolarismo y la reformulación del multipolarismo en sus propios términos, el desgaste de la diplomacia tradicional y la aplicación de la diplomacia por la fuerza por la parte estadounidense, las alianzas, la hegemonía, la conducta imperial y la ilegitimidad de iniciativas bélicas³ desarrolladas al margen de los criterios jurídicos internacionales, entre otros los consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, y la amplia oposición internacional a la guerra que traslucía el rechazo a la hegemonía y exhibición de poderío de los Estados Unidos, son temas que no desaparecerán fácilmente del marco del debate internacional ni dentro de los propios Estados Unidos.⁴

¹ Isabel Jaramillo, “Coping with 9/11, State and Civil Society Responses”, *Caribbean Security in the Age of Terror*; Ivelaw Lloyd Griffith (editors), Ian Randle Publishers, Kingston, Jamaica, and Miami, 2004, pp. 371-390.

² *The National Security Strategy of the United States*, The White House, September 2002, también *Directiva de Seguridad Nacional*, No. 17, mayo 2002. Ver también David S. Cloud and Greg Jaffe, *Conflict Over Iraq*, *The Wall Street Journal*, September 3, 2002, p. 1, y desde otro punto de vista D. Robert Worley, *Waging Ancient War; The Limits on Preemptive Force*, Strategic Studies Institute (SSI), US Army War College, February 2003.

³ *Transcript: Powell Convinced Iraq's Weapons of Mass Destruction Will Be Found*, U.S. Department of State, Secretary Colin L. Powell, Interview on BBC's Iraq Documentary, Washington, DC, April 23, 2003, también Byliner, “Iraqi Chemical, Biological Weapons Will be Found, Perle Says” (Richard Perle op-ed article in *USA Today*, May 2, 2003) (520) <http://usinfo.state.gov>. Desde el punto de vista del debate sobre qué se manipuló y quién lo manipuló: James Risen and Douglas Jehl, “Expert Said to Tell Legislators He Was Pressed to Distort Some Evidence”, *The New York Times*, Jun 25, 2003.

⁴ En el plano más general, el impacto de los temas mencionados, se refleja en el estudio de la opinión internacional realizado por el *Pew Research Center*, donde se evidencia que “la guerra ha ampliado la brecha entre los estadounidenses y los europeo-occidentales, ha encendido aun más al mundo Musulmán, ha debilitado el apoyo a la guerra al terrorismo y ha debilitado significativamente el apoyo público global a los pilares de la era post-II Guerra Mundial —las Naciones Unidas y la OTAN—. Ver *Views of a Changing World*, June, 2003, The Pew Research Center For The People & The Press, Washington, D.C., www.people-press.org.

La recuperación de la efectividad de los organismos multilaterales y el esfuerzo mancomunado, como respuesta a los innumerables retos a la seguridad internacional se ve, sin embargo, prácticamente mediatizado por el unilateralismo estadounidense. La resultante es una disgregación de iniciativas constructivas, ruptura de alianzas, y priorización de temas que pueden —incluso— ser irrelevantes para la mayoría del mundo subdesarrollado, en un contexto caracterizado por el desequilibrio y la inestabilidad. En este sentido, cabe señalar que “los atentados terroristas al WTC-Pentágono marcan un punto de inflexión en el sistema internacional y resulta en una recomposición de las alianzas en el ámbito global, donde lo que primará serán los intereses particulares y específicos de cada uno y la construcción de un entramado de múltiples alianzas y coaliciones *ad hoc*”⁵ Consecuentemente, y unido a los efectos de la globalización en los términos en que se está dando, el orden de las prioridades en el marco global no será aquel que favorecería la cooperación y la recuperación del multilateralismo —que podría asumir las características de un multilateralismo cooperativo—⁶ no excluyente, cuestión especialmente relevante para el mundo en desarrollo.

La estrategia de seguridad de los Estados Unidos —a partir del 11 de septiembre de 2001— se basa en dos pilares interrelacionados, en el plano externo e interno: la doctrina preventiva, que priorizará el enfrentamiento al terrorismo; y la seguridad interna (*Homeland Security*). La cruzada contra el terrorismo y el desplazamiento de la “zona de seguridad hacia afuera”, produjo una serie de cambios en los Estados Unidos que tienen un impacto y se hacen extensivos a la región.

La campaña antiterrorista impulsada por los Estados Unidos parecía relegar a América Latina y el Caribe a un escalón aún más remoto en el rango de prioridades de la política exterior estadounidense. La agenda de política exterior cambia de acento y de prioridades y los temas relacionados con la seguridad pasan a primer plano. El eje —en términos de seguridad— no será el narcotráfico sino el terrorismo, que se articulará con el narcotráfico, tráfico de armas, fronteras, y otros temas de la agenda. América Latina y el Caribe temen, a partir del legado de desconfianza originado en la política de los Estados Unidos, que en la redefinición de la política exterior y el cambio de prioridades, los temas de la agenda interamericana en el terreno económico y comercial pasen a un segundo plano, sobre todo si

⁵ Ver Isabel Jaramillo Edwards, “Los Atentados Terroristas al WTC y el Pentágono: Punto de Inflexión en las Relaciones Interamericanas”, *Fuerzas Armadas y Sociedad*, Año 16, No. 3 y 4, julio-diciembre de 2001, FLACSO-Chile, pp. 14-29.

⁶ Sobre el multilateralismo cooperativo, que asume “miradas comunes y convergencia”, ver Francisco Rojas Aravena, Respuestas Latinoamericanas al Terrorismo Global, en *Terrorismo de Alcance Global: Impacto y Mecanismos de Prevención en América Latina y el Caribe*, Francisco Rojas Aravena (editor), FLACSO-Chile, enero 2003, pp. 9-39.

consideramos que el Congreso estadounidense concentrará su atención en los temas generados a partir del terrorismo.

En el plano de la simbiosis comercio-seguridad, los Estados Unidos ven al ALCA como la posibilidad de hacerle contrapeso a Europa en el marco de la geopolítica mundial, que tiene como una de sus principales características la conformación de bloques económicos dominantes y una nueva división internacional del trabajo, máxime en un momento en que la Unión Europea (UE) ya constituye, con pros y contras, un bloque económico único que puede disputarle la supremacía económica y comercial, aunque todavía no política, a los Estados Unidos. Cabe destacar que alrededor del 75 % del comercio mundial se realiza en el marco de acuerdos regionales como la Unión Europea y el NAFTA. He ahí por qué la lucha política se desarrolla en esta etapa, a través del comercio, donde el elemento seguridad desempeñará un papel relevante.

La acentuación de características que han sido tradicionales en la política de los Estados Unidos y América Latina —unilateralismo y priorización de los temas de seguridad— cobran nueva relevancia,⁷ en un mundo que eventualmente tiende al multipolarismo.

Una mirada retrospectiva: Los Estados Unidos y Chile en los años de 1970

En el plano global, y en el marco de la confrontación este-oeste, los Estados Unidos (1971) impulsaban sus intereses económicos, iniciándose una nueva era de competencia entre los grandes bloques comerciales, en un nuevo ciclo globalizador. Es el momento en que el imperialismo llevaba a cabo una ofensiva estratégica en América Latina, y el golpe en Chile se insertaba en la cadena de dictaduras militares que gobernarían en el continente durante casi dos décadas.

La política exterior de los Estados Unidos hacia Chile en 1970 constituye un clásico en cuanto a los métodos injerencistas empleados en la consecución de sus objetivos, en este caso, el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende.

Después de la II Guerra Mundial en Chile se desarrolla una estrategia de industrialización, en la que se utilizó la inversión estatal para promover el desarrollo (se creó la Corporación de Fomento-CORFO). En este proceso las elites preindustriales chilenas con algunos aliados del Frente Popular desplazaron simplemente su riqueza de la agricultura o el comercio a la industria, ayudados y apoyados por un Estado que ellas controlaban. Entre 1930 y 1950 se amplió la clase media que comenzaba a identificarse con la estructura industrial de los Estados Unidos. A principios de 1960 Chile era prácticamente autosuficiente en la mayor

⁷ Isabel Jaramillo, *La Cuenca del Caribe: los Puntos Sensibles (Haití, Venezuela, Colombia)*, Ponencia (Draft) presentada en Taller “La seguridad hemisférica: realidades y perspectivas en el 2005”, CEID-Woodrow Wilson Center, Ciudad de La Habana, 27 y 28 de abril de 2005.

parte de los bienes de consumo. Sin embargo, la importación de la industria liviana seguida por la de bienes durables no produjo una mayor independencia nacional ni real al crecimiento económico, por el contrario estas importaciones aumentaron la dependencia de los Estados Unidos y de hecho profundizaron el subdesarrollo de la economía chilena. Entre 1946 y 1961, antes que la asistencia comenzara a fluir realmente, Chile recibió 450 millones de dólares en préstamos y concesiones de las agencias de desarrollo de los Estados Unidos y del Eximbank. La dependencia de Chile de las fluctuaciones del precio del cobre en el mercado mundial siempre condicionó la obtención de divisas.

Desde 1955 a 1970, los Estados Unidos desarrollaron hacia Chile políticas diferentes: entre 1956 y 1961 impusieron un programa de austeridad, al estilo del Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de préstamos para equilibrar el déficit comercial chileno. De 1963 en adelante, con la *Alianza para el Progreso (ALPRO)*, abandonan el estilo austero y prodigan préstamos a Chile en la lógica de crear “un ejemplo de democracia”. Ambas políticas tenían objetivos similares: estabilizar la democracia tambaleante y proteger y fomentar las inversiones e influencia de los Estados Unidos. Estas no solo no provocaron crecimiento sino (entre 1955 y 1970 Chile creció en solo un 0,7 %) que se incrementó enormemente la dependencia del país. La deuda externa creció vertiginosamente de 569 millones de dólares en 1958 a casi cuatro mil millones en 1970. En 1970 de las 100 compañías más grandes, 40 estaban bajo control extranjero e incluían los sectores más dinámicos. La dependencia de las importaciones de maquinarias se mantenía tan fuerte como antes. Según el Boletín del Departamento de Estado de la época, “la asistencia masiva a Chile con capitales norteamericanos comenzó en 1961(...) en 1962 se otorgó otro préstamo adicional luego de una crisis de divisas. Durante los dos años previos a las elecciones de 1964 la asistencia de los Estados Unidos se dirigió a mantener los modestos avances logrados en años anteriores de forma de proveer al nuevo gobierno de una base mejor y a prevenir el deterioro económico...”. Durante ese año —1964— la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) continuó su apoyo al presupuesto y balanza de pagos chilenos para prevenir un deterioro económico que hubiera actuado como detonante de la desocupación y del descontento y, presumiblemente, de un vuelco a la extrema izquierda desde el punto de vista político. De hecho, resultó en presentarles al gobierno entrante de Eduardo Frei Montalva y al pueblo chileno una economía tambaleante remendada temporalmente por la ayuda de emergencia.⁸

⁸ Senador E. Gruening, *US Foreign Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) in Action, A case Study*, p. 115. Citado por E. Fansworth, R. Feinberg, E. Leenson, en *Chile: El Bloqueo Invisible*, Ediciones Periferia, Buenos Aires, 1973. En Estados Unidos: “Chile, Facing the Blockade”, *Latin America & Empire Report, NACLA*, Vol.III, No.1, 1973.

Entre 1964 y 1970 el Eximbank otorgó préstamos a Chile por 268,8 millones de dólares. Esta disponibilidad de créditos permitió convencer a Chile para que comprara bienes norteamericanos de alto precio que no hubieran resultado competitivos en el mercado mundial. Los sectores que recibieron los préstamos del Eximbank para importar maquinarias norteamericanas fueron los sectores clave del cobre, el nitrato, el acero, la electricidad, las comunicaciones y los ferrocarriles. El objetivo manifiesto de los programas era crear un clima favorable a la inversión.

Los Estados Unidos consideraban —y consideran— que la inversión en el exterior es crucial para el crecimiento de su economía. “La realidad del imperialismo va mucho mas allá del interés inmediato de este o aquel inversor: el propósito subyacente es nada menos que mantener abierta al comercio y la inversión de las grandes corporaciones multinacionales la mayor parte posible del mundo”.⁹ Este es un compromiso reiterado. Las expropiaciones, por supuesto contradecían los presupuestos que guiaban la promoción de la inversión directa. En 1970, bajo la forma de asistencia bilateral y multilateral, los préstamos privados y créditos a los proveedores de los dólares eran la mayor exportación norteamericana a Chile y resultaban cruciales para el funcionamiento de la economía chilena.¹⁰

La economía de los Estados Unidos en 1970 se estaba deteriorando en el ámbito nacional e internacional. Tanto la inflación interna como la tasa de desocupación eran altas. Las reservas de oro disminuían la participación de los Estados Unidos y en el mercado mundial decrecía, y la balanza de pagos arrojaba un saldo negativo. Entre tanto, los socios comerciales de los Estados Unidos, especialmente Japón y Europa occidental, experimentaban altas tasas de crecimiento en el comercio e industria y expandían sus inversiones en el extranjero. Los Estados Unidos estaban a la defensiva y sus dirigentes enfrentaban las amenazas emergentes de las expropiaciones chilenas desde una perspectiva que magnificaba su importancia para sus intereses.

Durante la administración Nixon (1969-1974),¹¹ particularmente como resultado de la derrota de Viet Nam y de la ruptura del consenso interno en cuanto a política exterior, se tiende a disminuir el énfasis en los medios militares como forma de proyectar el poder imperial y se le reemplaza por ofensivas económicas y diplomáticas, alianzas y la utilización de gendarmes regionales. En esta etapa se desarrolla la *detente*, el acercamiento a China, relaciones que se darán como equilibrio a la confrontación bipolar, los acuerdos *Salt I* y la aprobación del Acta de Poderes de Guerra, como ejemplo de esta tendencia. Esto no significó que se

⁹ E. Fansworth, R. Feinberg, E. Leenson, Ob. cit.

¹⁰ Esto significaba un mayor poder del Departamento del Tesoro que tenía a su cargo la política de asistencia bilateral y multilateral de los Estados Unidos y se le considera el mayor defensor que tiene los intereses de las grandes empresas privadas en el poder ejecutivo.

¹¹ Cuestión que se extendió también de la administración de G. Ford (1974-1977).

eliminaran la asistencia militar y las operaciones encubiertas más bien se agregaban a la ofensiva económica y diplomática, desembocando en la “desestabilización” aplicada en Chile, y en Jamaica posteriormente.

La “Doctrina Nixon”¹², implícita en el marco más amplio de la “Disuasión Realista”, sostenía que debía combinarse la asistencia militar, de forma de elevar la capacidad de defensa de los países de manera que pudieran enfrentar una posible subversión, sin la participación directa de tropas norteamericanas. Quedaba claro que las tropas norteamericanas no debían ser las que enfrentaran la insurgencia. Esta debía ser evitada por medio de programas sociales y económicos, y en el aspecto militar, controladas por las fuerzas locales. Consecuentemente se aumentó la venta de armas a países “amigos”.

Esta concepción era reflejada en la “vietnamización” de la guerra en el Sudeste Asiático, como forma de intentar de desvincular a las tropas norteamericanas del frente de guerra. Se reformulaba una doctrina, prolongando los implícitos de la contrainsurgencia, con características formalmente diferentes.

La fundamentación de la asistencia militar para América Latina de julio de 1969 planteaba que “una de las metas principales de nuestro programa de ayuda militar ha sido, y sigue siendo, que nuestros vecinos latinoamericanos obtengan su desarrollo socioeconómico mediante una evolución sistemática y no en la atmósfera inflamable de una revolución destructiva. Los Departamentos de Estado y de Defensa trabajan juntos para que esta vinculación prevalezca en debida forma”, y se agregaba que “la existencia de inadecuadas estructuras económicas y sociales vulnerables a la subversión hacen necesario mantener la capacidad contrainsurgente de las fuerzas armadas latinoamericanas a fin de que pueda existir una atmósfera interna que conduzca hacia el progreso económico y social”.¹³ Se trataba de insistir en lograr que los países de América Latina mantuvieran una efectiva capacidad contrainsurgente por medio de la ayuda militar norteamericana. En términos internos, los objetivos fueron elevar la capacidad y preparación —tanto en entrenamiento, donaciones de material bélico y ventas de equipos militares— de las fuerzas locales para que pudieran ejercer a cabalidad como guardianes del “orden interno”. Se aseguraba así el aparato militar represivo que adoptaría e implementaría la “doctrina de seguridad nacional”, que les permitiría establecer un nuevo patrón de acumulación, hegemonizado por el capital transnacional y las burguesías

¹² También llamada “Doctrina Guam”. Para detalles, ver Henry Kissinger, *Diplomacy*, Simon & Schuster, 1994, p. 708.

¹³ Audiencia ante el Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos (91 período legislativo, 1ra. sesión, 24 de junio y 8 de julio de 1969). Declaración del Honorable C. A. Meyer, Secretario Adjunto de Estado para asuntos Interamericanos. Documento incluido en J. Saxe-Fernández, *Proyecciones Hemisféricas de la Paz Americana*, Instituto de Estudios Peruanos, Amorrurtu Editores, Lima, 1974, p.131.

monopólicas nativas,¹⁴ a la vez que se trataba de eliminar al “enemigo interno” de forma de poder desarrollar el nuevo modelo.

La nueva política económica anunciada por Nixon en 1971 implicó una línea dura para la promoción de sus intereses económicos. Se iniciaba el fin del liberalismo al estilo Plan Marshall y el comienzo de una nueva era de competencia entre los grandes bloques comerciales. Esto implicaba un replanteo global de las relaciones exteriores. Una política externa poderosa suponía una línea dura en la política económica externa. Si se iba a hacer frente a las amenazas surgidas de la expansión de las economías europeas y japonesa, el gobierno de los Estados Unidos debían dedicarse más que nunca a la expansión y crecimiento de su propia economía; esto implicaba mas “asistencia y apoyo” a las corporaciones y un estímulo y protección más activos para las inversiones de los Estados Unidos en el Tercer Mundo.¹⁵

La Administración Nixon revisó también la doctrina de las dos y media guerras y la transformó en la de una y media guerras. En la esfera nuclear, se estableció la paridad con la Unión Soviética.¹⁶

Es el momento en que el imperialismo llevaba a cabo una ofensiva estratégica en América Latina, y el golpe en Chile se insertaba en la cadena de dictaduras militares que gobernarían en el continente durante más de una década.

Los resultados de las elecciones del 4 de septiembre de 1970 sorprendieron a la Administración Nixon y a la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Allende obtuvo el 36,3 % de los votos en una carrera electoral de tres candidatos (Jorge Alessandri 35 % y Radomiro Tomic 27,8 %). El margen de Salvador Allende sobre Jorge Alessandri fue de unos 39 000 votos.

La administración Nixon reaccionó casi como si los chilenos fueran niños erráticos, y la burocracia comenzó a barajar sus opciones para evitar el ascenso al poder de Salvador Allende. Entre las opciones propuestas había las que planteaban la eliminación (*terminate him*) del presidente electo por medio de ciudadanos chilenos o hacerlo con norteamericanos.¹⁷

El Presidente Allende desarrolló su programa dentro de los marcos de lo que permitía la legalidad existente, a partir de la cual había llegado al poder. Se suponía

¹⁴ Ver en este sentido, Luis Maira “Notas para un estudio comparado entre el Estado fascista clásico y el Estado de seguridad nacional del Cono Sur de América”, Ponencia CEDOCH, Casa de Chile, México, 1976.

¹⁵ E. Fansworth, R. Feinberg, E. Leenson, Ob. cit.

¹⁶ Ver Isabel Jaramillo Edwards, “El Conflicto de Baja Intensidad: Modelo Para Armar”, *Avances de Investigación*, No.24, Centro de Estudios Sobre América (CEA), 2ª ed., Ciudad de La Habana, Cuba, 1989, pp.20-22.

¹⁷ Seymour M. Hersh, *The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House*, Summit Books, Simon & Schuster, New York, 1983, p.259. Desde otro ángulo, “Destabilizing Chile”, in *The CIA File*, R.L. Borosage and J. Marks (editors), Grossman Publishers, Viking Press, New York, 1976, pp. 79-89.

que los cambios en la economía iban a provocar necesariamente cambios en la estructura del estado. Sobre el triunfo de la Unidad Popular en las urnas, Allende agregaba en su discurso del 5 de noviembre de 1970: “Lo asumo para orientar al país hacia una nueva sociedad, mas humana, en que las metas últimas son la racionalización de la actividad económica, la progresiva socialización de los medios productivos y la superación de la división de clase.”

El programa impulsado por el presidente Allende y la Unidad Popular implicaba justicia social y la redistribución del poder económico en la perspectiva de favorecer a amplios sectores de la población. Las fuerzas populares ajustaban su actuación a la realidad concreta de las estructuras chilenas, contemplando los reveses y los éxitos, no como derrotas o victorias definitivas, sino como hitos en el duro y largo camino hacia la emancipación.

Al asumir Allende el gobierno, Chile había vivido 60 días decisivos en su historia: el asesinato del Gral. René Schneider, Comandante en Jefe del Ejército, indicaba la existencia de “una guerra civil larvada”.¹⁸

El conjunto de factores tanto internacionales como internos que condicionaron el proyecto político allendista fueron: la recesión en Europa entre 1971-72 que provocó la caída del precio del cobre; el bloqueo financiero; el sabotaje económico de la oposición; y las afectaciones reales derivadas de las medidas del gobierno.

El presidente Allende fue siempre partidario de solucionar los problemas por la vía de la persuasión, y rechazaba las luchas fratricidas. En uno de sus discursos se refería al lema del escudo Chile: *Por la razón o la fuerza*, pero primero la razón, sostenía.

El presidente subrayaba también que, desde fines del siglo XIX, la estabilidad institucional de la república había sido una de las mas consistentes de Europa y América, y decía: “esta tradición republicana y democrática llega así a formar parte de nuestra personalidad, impregnando la conciencia colectiva de los chilenos”.

El programa del gobierno se propuso liberar del control extranjero a los recursos productivos estratégicos de la economía nacional,¹⁹ socializar los medios de producción fundamentales que dominan el proceso productivo interno, y elevar el nivel de bienestar material de los sectores populares. Se trataba de combinar el proceso de acumulación necesario para el crecimiento económico acelerado y el incremento inmediato y substancial del nivel de vida de las grandes masas.

¹⁸ Sobre Chile, ver Joan Garcés, *El Estado y los problemas tácticos*, Siglo XXI Editores, España-México-Argentina, 1974 y Joan Garcés, *Allende y la experiencia chilena, Las armas de la política*, Ediciones BAT, Santiago, Chile, 3ª ed., 1991. Este último texto fue publicado por primera vez en 1976.

¹⁹ El cobre no fue desnacionalizado por el gobierno militar, cuestión que se mantiene hasta la actualidad.

Es en este marco que se inscribe la nacionalización de la Gran Minería del Cobre, cuya rápida ejecución era garantía indispensable para permitir la viabilidad del esquema concebido en el Programa en cuanto a reconocer junto al área de Propiedad Social (traspaso de 91 empresas) dominante junto a la existencia de una amplia Área Privada.

En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 4 de diciembre de 1972, Salvador Allende, a la vez que denunciaba la agresión contra nuestro país, planteaba cuestiones centrales al proyecto popular. Una de las cuestiones que siempre subrayó fue que “la voluntad democrática de nuestro pueblo ha asumido el desafío de impulsar el proceso revolucionario dentro de los marcos de un estado de derecho altamente institucionalizado, que ha sido flexible a los cambios y que hoy está frente a la necesidad de ajustarse a la nueva realidad socioeconómica.”²⁰ Fue uno de los programas mas avanzados desde la perspectiva de una nueva moral, un nuevo espíritu y un sentido solidario y distinto de la vida en lo colectivo y en lo humano.

Una de las más serias preocupaciones del Gobierno Popular fue siempre la dificultad para alcanzar una conducción política unitaria en el seno de la coalición de partidos, cuestión que Salvador Allende consideraba vital y a la cual prestaba una gran atención. Las discrepancias tácticas que coexistían en la Unidad Popular provocaban excesiva lentitud en la toma de decisiones, desaprovechando las coyunturas más propicias para cambios tácticos. Así entre octubre de 1972 y marzo de 1973 la Unidad Popular —frente a la ofensiva desatada en su contra— no logra ajustar su organización interna y forma de acción conjunta a la nueva realidad.²¹

En la conducción de un proceso revolucionario es imperiosa la unidad estratégica y táctica de los distintos movimientos que la apoyan. La gran mayoría de las deficiencias y equivocaciones políticas que se pueden resaltar durante el gobierno de la Unidad Popular tienen allí, directa o indirectamente, su origen último.

Luego de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, el Presidente Allende plantea a los partidos de la Unidad Popular que hay dos opciones políticas principales para encarar la crisis del estado²² y sus consecuencias sobre la coyuntura económica: una de ellas y aquella por la cual se decidió Allende, fue el plebiscito de forma de resolver el conflicto con el Congreso y a pesar de la oposición de algunos partidos de la Unidad Popular. Esta decisión le fue comunicada a las FFAA el 7 de

²⁰ Salvador Allende, *Discurso Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas*, 4 de diciembre de 1972.

²¹ Joan Garcés, Ob. cit., p. 33.

²² Garcés apunta que ya en mayo de 1973 la crisis en las relaciones internas del Estado alcanza su punto culminante y agrega que ya a comienzos de junio la fase político-institucional del proceso revolucionario chileno estaba cerrada. Ibíd. p. 38.

septiembre de 1973, el mensaje a la nación estaba anunciado para el 11, y fue el detonador que determinó la aceleración del golpe militar.²³

En los años 1970, el Tercer Mundo emprendía el camino de la recuperación de sus recursos naturales: en el caso de Chile se tradujo en la nacionalización del cobre, que fuera parte importante del proyecto político de la Unidad Popular. En Chile, el tema de la extensión de la presencia de las corporaciones multinacionales era objeto de constante debate y a fines de la década de 1960 era un tema político tanto para la izquierda como para sectores nacionalistas. El 80 % de la producción de cobre —el 60 % de todas las exportaciones chilenas— estaba en manos de grandes corporaciones, en su mayoría controladas por firmas de los Estados Unidos, siendo las más prominentes la Anaconda y Kennecott Copper. Las ganancias de estas compañías eran enormes: durante los años 60, por ejemplo, la Anaconda Copper ganó 50 millones de dólares sobre sus inversiones dentro de Chile donde operaba una de las minas a tajo abierto mas grandes del mundo, generosamente estimadas por la compañía en 300 millones. En 1968, estudios demostraban que el 28,3 % del pueblo chileno, que estaba en la base de la escala económica, obtenía el 4,8 % del ingreso nacional, mientras que el 2 % de la población que estaba en la cúspide de la escala recibía el 45,95 % del ingreso. La nacionalización del cobre chileno se transformó en un punto sensible, no solo por su valor intrínseco, sino que, además, por su significación simbólica, podía transformarse en un ejemplo. El papel de la ITT en el derrocamiento del presidente Allende está suficientemente documentado. Los esquemas de la ITT para sembrar el caos económico en Chile demuestran como se había elaborado un programa de 18 puntos diseñado para gestar un golpe de estado.

Inmediatamente después de la nacionalización del cobre (Anaconda y Kennecot), en octubre de 1971, el Secretario de Estado William Rogers, empezó a coordinar las acciones para “modificar la estructura de la autoridad interna de Chile”, con altos ejecutivos de ITT, Ford, Anaconda, Bank of America, First National City Bank, entre otros.

Entre las presiones realizadas se incluyó el cese de créditos del Eximbank de los que dependían importaciones importantes para Chile; ejercer presión en instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para que rechazaran los créditos a Chile; y también se estimulaba a la banca privada a detener todas las líneas de crédito, las que en su conjunto pasaron de 220 millones de dólares a 35 millones de dólares, durante el primer año de gobierno de Allende.

Los Estados Unidos pusieron fin al programa de ayuda a Chile, con la excepción del programa militar, que pasó de 800 000 dólares a más de 12 millones de dólares en dos años.

²³ Ibíd. p. 51.

Tradicionalmente la política exterior de los Estados Unidos funciona a partir de una lógica multidireccional de varios carriles,²⁴ o *tracks*, que se aplican según la coyuntura política específica del país que es objeto de dicha política y del contexto internacional. El *Carril I* incluía propaganda antiallendista y programas políticos que habían sido aprobados por el Comité de los 40 y encargados al embajador E. Korry y al representante de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chile. En el marco del *Carril II*, agentes clandestinos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y los llamados “operativos bandera falsa”, especialmente reclutados llegarían a Santiago y contactarían a un grupo de oficiales de las FFAA, de extrema derecha, que estaban en disposición, si se los financiaba adecuadamente, de derrocar al gobierno antes de la elección congressional del 24 de octubre y evitar así que Allende asumiera la presidencia. El objetivo era no solo alentar a los militares chilenos a dar un golpe, sino también aportar ayuda directa para lograrlo. En el caso de Chile, el *Carril II* nunca terminó y se siguió implementando sistemáticamente y fue fundamental ya que se recopilaba información que sería esencial para la dictadura militar, esto es: listas de civiles que debían ser arrestados; aquellos a los cuales había que proteger y las instalaciones gubernamentales a ser ocupadas de inmediato, además de los planes de contingencia del gobierno de Salvador Allende en el caso de un golpe.

Los archivos del Comité de los Cuarenta demuestran que antes de las elecciones en Chile, el tema se discutió al menos en cuatro ocasiones, entre abril de 1969 y septiembre de 1970. En marzo de 1970 se aprobaron 135 000 dólares para propaganda en contra de la candidatura de Salvador Allende. El 27 de junio, el Comité aprobó una asignación adicional de 300 000, recomendados por el entonces Embajador Edward Korry y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Fue en esta reunión —según las minutas oficiales— que H. Kissinger apoyó los programas en contra de Salvador Allende, diciendo: “No veo por qué necesitamos quedarnos mirando cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo”.²⁵ En estas reuniones iniciales, sin embargo, el Departamento de Estado generalmente asumía la postura en contra de incrementar la interferencia directa en las elecciones presidenciales chilenas. En sus memorias, Henry Kissinger plantea que W. Rogers y el Departamento de Estado le restaban importancia tanto a la posibilidad, como al peligro, de una victoria electoral de Salvador Allende. Lo que realmente aprobó el Comité de los Cuarenta en los meses de marzo y junio, fueron una serie de operaciones anti Salvador Allende —destinadas a destruirlo como opción— que utilizaron los medios de comunicación y los grupos cívicos de la derecha para circular rumores contra la coalición de la Unidad Popular. En dicha

²⁴ Para la CIA en Cuba, ver Fabián Escalante Font, *Cuba: La Guerra Secreta de la CIA*, Editorial Capitán San Luis, Ciudad de La Habana, 1993.

²⁵ Seymour M. Hersh, Ob. cit., p. 265.

propaganda se establecía una comparación entre la elección de Salvador Allende y sucesos tales como la invasión de Checoslovaquia por los soviéticos en 1968 y los supuestos fusilamientos realizados en Cuba al triunfo de la revolución, entre otros. A la altura de 1970, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) subsidiaba dos servicios informativos de cables y un periódico de derecha cuyos puntos de vista eran tan extremos como para alienar a los “conservadores responsables”. El embajador Edward Korry señalaba que la campaña de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) era tan burda que resultaba contraproducente y que, de hecho, favorecía a Salvador Allende.

Según Kissinger, el presidente R. Nixon estaba furioso y culpaba al Departamento de Estado y al embajador Korry.²⁶ A partir de este momento, agrega H. Kissinger, el presidente R. Nixon buscó evitar a la burocracia lo más posible y operar por otros canales. Los análisis de inteligencia de la época indicaban que Salvador Allende no era una amenaza a la seguridad nacional y la postura del presidente Nixon se atribuye fundamentalmente a su preocupación por el futuro de las corporaciones norteamericanas y sus propiedades, que pensaba serían nacionalizadas por el gobierno de Salvador Allende.

Los *National Intelligence Estimates* eran realizados en la época por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otras agencias y entre 1969 y 1973 ofrecen pocas evaluaciones explícitas de la amenaza que representaba el Chile de Salvador Allende. Un Memorándum de Inteligencia del 4 de noviembre de 1970 realizado justamente después de las elecciones es explícito, sin embargo, en cuanto a la amenaza. A pesar de estar escrito por la CIA, reflejaba los puntos de vista del Grupo Interdepartamental para Asuntos Interamericanos, que había preparado la respuesta al NSSM97 e incluía además representantes del Departamento de Estado, Departamento de Defensa y la Casa Blanca. Este Memo concluía que los Estados Unidos no tenía intereses vitales dentro de Chile, que el balance militar global de poder no iba a ser significativamente alterado por el régimen de Allende y que su victoria no representaba una amenaza a la paz en la región.²⁷

Luego del fracaso de la opción orientada a evitar que Salvador Allende asumiese la presidencia de Chile, la administración de R. Nixon emitió el *National Security Decision Memorandum No.93*, “Política Hacia Chile”, que delineaba la guerra económica. Sus aspectos principales eran:

1. “A-Excluír, en la medida de lo posible, más asistencia financiera de garantía para las inversiones norteamericanas en Chile, incluyendo las

²⁶ Identificaba a E. Korry como hombre del Presidente J. Kennedy.

²⁷ Ver Gregory F. Treverton, *Covert Action: The Limits of Intervention in the Postwar World*, Basic Books, USA, 1987, pp. 168-169.

- relacionadas con el programa de garantías a inversiones o las operaciones del Eximbank;
2. B-Determinar el grado en que las garantías existentes y los arreglos financieros pueden ser eliminados o reducidos;
 3. C-Ejercer el máximo de influencia posible en las instituciones financieras internacionales para limitar el crédito y otra asistencia financiera a Chile;
 4. D-Asegurarse de que los intereses de la empresa privada norteamericana, que tenga intereses u operaciones en Chile, sepan de la preocupación con que el gobierno de los Estados Unidos ve al gobierno de Chile y la naturaleza restrictiva de las políticas que el gobierno de los Estados Unidos se propone implementar”.

La historia misma demuestra que los Estados Unidos tuvieron la principal responsabilidad en la desestabilización del gobierno popular y en el cruento golpe militar en Chile.²⁸

El continente americano: el entorno

América Latina y el Caribe constituyen un conglomerado heterogéneo —muchas veces caracterizado por políticas *ad-hoc*— en cuanto a posturas en el contexto internacional.

Los procesos progresistas emergentes en América Latina son consecuencia de una reacción general derivada de las tensiones económicas y sociales resultantes de las reformas estructurales y del consenso de Washington. Los supuestos efectos de las reformas nunca han llegado a las personas. Los países andinos no crecieron en los años 90: Fue solo del 1,9 % que no llegó al promedio latinoamericano que fue de 2,3 % en los años posteriores a la década perdida de los años 80. El triunfo en las elecciones de Lula, Chávez, Kirchner, Tabaré Vázquez, e incluso Chile, aunque todos con características diferentes, traduce una dinámica que caracteriza hoy al continente, donde el péndulo se ha movido al centro izquierda. Es importante considerar, en este sentido, la importancia de las matrices históricas: el choque entre

²⁸ Después del golpe militar de 1973, se produce la implementación de la Operación Cóndor: Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. Manuel Contreras-DINA. Muerte de Orlando Letelier en Washington, la conexión cubana (Bosch). Ver John Dinges and Peter Kornbluh, *An Assassination, A Failure to Act, A Painful Parallel, The Washington Post*, September 22, 2002, p. B01; Peter Kornbluh, *The Pinochet File*, A National Security Archive Book, The New York Press, 2003-2004; John Dinges, *The Condor Years*, The New Press, 2003, y en español John Dinges, *Operación Cóndor, Una Década de Terrorismo Internacional en el Cono Sur*, Ediciones B, Chile, 2004.

la modernización y una pobreza establecida de tiempos inmemoriales y el surgimiento de lo que algunos llaman la “utopía arcaica”.²⁹

En épocas de cambios surgen mecanismos de reacción: frente a la globalización, por ejemplo, la reafirmación de la identidad aunque los elementos de orden identitarios son de carácter permanente. El indigenismo se asocia en América Latina al sentimiento antiglobalización. Cabe pensar también que tal vez la globalización lo que genera es la diversidad cultural, el conocimiento de los otros. Entre los análisis y las propuestas, se plantea que las reformas macroeconómicas no “disparan” el desarrollo y deben combinarse con políticas públicas de redistribución en el área social (ejemplo Brasil, Venezuela).

Desde la óptica estadounidense, los puntos de preocupación actual —en el plano interamericano— son Colombia, Venezuela, Bolivia, Haití y Cuba, cada uno a una escala específica. Además se presta atención a los climas de inestabilidad política en Perú y Ecuador.

La percepción sobre los Estados Unidos se ha deteriorado en América Latina, y a la vez desde los Estados Unidos se percibe que América Latina no transita por la ruta deseada (“*doesn’t deliver*”). Hay un incremento significativo en el sentimiento antiestadounidense.

El debate en América Latina sobre el papel del Estado y en este marco el desarrollo es fundamental. Cabe señalar que en momentos de transición global como el actual, el rol del estado tiene a fortalecerse (aunque se compacta), de manera diferente al siglo XX. Se produce también una reactivación del activismo de los desposeídos y de movimientos sociales pero lo que más llama la atención es el activismo de las clases medias frente a problemáticas de orden social: actualmente es el caso de México, y de Argentina, en lo que se refiere a delincuencia, secuestros, etcétera. Los problemas étnicos asociados a problemas sociales, que emergen a la superficie de sociedades que han ignorado su existencia durante generaciones.

En el plano interamericano los Estados Unidos, reajustan al ALCA y dan continuidad y nuevo impulso a la Cumbre de las Américas, que funge como eje paralelo al sistema interamericano (TIAR; OEA; JID; etcétera) sobre todo considerando que, por primera vez en la historia de la OEA, el secretario general electo no fue precisamente su candidato.

Recursos energéticos e infraestructura en la perspectiva de la integración

La inestabilidad es un elemento que ha concitado una “cierta mirada” estadounidense hacia América Latina, en un momento en que se espera un incremento en la producción de petróleo en el área. La producción de petróleo de

²⁹ Alfredo Barnechea, “Los Andes, Entre la globalización y la utopía arcaica”, *Foreign Affairs* en español, Vol. 4, No. 2, ITAM, México, 2004.

Colombia, aunque menor que la de Venezuela, está entre las más altas en América Latina. Las inversiones de *Occidental Petroleum* (Los Angeles) son significativas, entre las de otras compañías transnacionales. En el caso de Ecuador, se espera que la producción de petróleo aumente en los próximos años y puede llegar a unos 600 000 barriles por día en el 2005. En 2004, México planteaba que no vendería petróleo crudo a precios subsidiados a América Central. Los centroamericanos buscaban concesiones en el marco del Pacto de San José.³⁰

El caso de Bolivia y el gas, es parte del complejo escenario político del país que tiende al fraccionamiento.³¹ Las fricciones con Chile son históricas y se relacionan con la salida al mar.³² Este es un tema que se inscribe en el marco más amplio de la construcción y desarrollo de infraestructura en América del Sur.

La integración y el libre comercio tienen que ver esencialmente con la importancia de la Iniciativa Regional para la Integración de la Infraestructura Sudamericana, IIRSA. La IIRSA tiene que ver con ejes de comunicación, corredores interoceánicos, desarrollo interior, desarrollo de zonas fronterizas, etcétera. Las cuestiones anteriormente mencionadas son esenciales en la interrelación con las multinacionales y en la perspectiva de la inserción en la globalización. En este plano, cabe señalar que se subraya la protección de los propios intereses de cada uno.³³

La propuesta del Presidente Hugo Chávez en torno a la creación de Petrosur³⁴ (Petrocaribe, etcétera) se inserta en un proyecto destinado a dinamizar una integración multifacética desde América Latina, que intenta eventualmente y a largo plazo, un reordenamiento geopolítico del continente.

Cabe recordar que Venezuela es el 5to exportador de petróleo del mundo y alrededor del 14 % del petróleo que importa los Estados Unidos proviene de ese país, considerado un suministrador clave dado la cercanía geográfica. Toma alrededor de cinco días —para los Estados Unidos— adquirir el petróleo en Venezuela, comparado con alrededor de cinco semanas hacerlo desde el Medio Oriente.

En el marco de la “securitización” del hemisferio, el tema de la democracia —desde el enfoque de la Administración G.W. Bush— pasa a segundo plano, circunscribiéndose a un ejercicio funcional-pragmático. Es en el caso de Venezuela donde el tema de la democracia electoral ha resultado contraproducente para los

³⁰ “Mexico’s Fox Says No Crude Oil Discounts for Central America”, *The Wall Street Journal*, May 28, 2004.

³¹ “Bolivian Energy Minister Quits on Referendum Clash Tiempos Says”, May 25, 2004, Bloomberg.com

³² Para la postura de Chile, ver *Las Relaciones entre Chile y Bolivia, Una mirada constructiva en el siglo XXI*, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, mayo de 2004.

³³ Ver Isabel Jaramillo, “El llamado tercer Mundo y las Transnacionales”, *Cuadernos de Nuestra América*, Vol. 1, No. 0, Ciudad de La Habana, julio-diciembre de 1983, pp. 150-164.

³⁴ Luis Bilbao, “Petrosur: Una OPEP suramericana”, *Le Monde Diplomatique*, Argentina, junio de 2005, p. 10.

Estados Unidos: Hugo Chávez, llega al poder por medio de un triunfo en las urnas, cuestión difícilmente discutible, y ha sabido utilizar la codificación democrática, implícita en la Carta Democrática de la OEA, a su favor. El tema se transforma, de alguna manera, en central para América Latina, en la medida en que una transgresión estadounidense hacia el tema de la democracia *vis a vis* el gobierno venezolano, demostraría la vulnerabilidad de los propios principios que dice apoyar. Sin embargo, esto no significa que América Latina comparta totalmente las propuestas y los puntos de vista del Presidente Hugo Chávez, sino que se trata de un enfoque puntual hacia un tema que podría impactar negativamente, según como se desarrolle, al continente en su conjunto.

Las divisiones de la Administración G.W. Bush en torno a la política hacia Venezuela, debido al proceso mismo y a sus supuestos vínculos con guerrilla colombiana son evidentes. Luego del intento de golpe de estado en el 2002,³⁵ a comienzos de 2004, las tensiones se relacionaban básicamente con el *referendum* y su realización, posteriormente se han ampliado a otros temas incrementado el diapasón de la retórica de ambas partes. El incremento de las fricciones con Venezuela no contribuye a fomentar un entorno estable para la integración y el desarrollo. El desarrollo de políticas surgidas de sectores extremadamente conservadores y militaristas incrementa las percepciones de inseguridad, fundamentalmente derivadas de la política estadounidense. Más aún, la identificación de Venezuela en el rango de “enemigo externo” no augura dinámicas positivas en este caso.³⁶

El eje de la política estadounidense en Colombia continúa siendo el narcotráfico, asociado al terrorismo, en un conflicto que ha llegado a un punto en que parece prolongarse indefinidamente. En este marco, los Estados Unidos baraja alternativas con vistas a las elecciones en el país. El reacomodo del contexto político en la perspectiva electoral, el nuevo ciclo negociador caracterizado por la prácticamente ausencia de sustento legal y jurídico que incluya un amplio espectro de delitos que van desde el crimen organizado hasta la vulneración de los derechos humanos, el incremento de la violencia y la guerra que no parece desembocar la ruptura de un *impasse* entre las fuerzas enfrentadas, conforman un cuadro donde la prolongación del conflicto parece inevitable.

³⁵ Ver para este tema Eva Golinger, *El Código Chávez*, Descifrando la Intervención de Estados Unidos en Venezuela, Ciencias Sociales, Ciudad de La Habana, 2005.

³⁶ Ver Isabel Jaramillo E., “La Cuenca del Caribe: los Puntos Sensibles (Haití, Venezuela, Colombia)”, Ponencia (Draft) presentada en Taller *La seguridad hemisférica: realidades y perspectivas en el 2005*, CEID-Woodrow Wilson Center, Ciudad de La Habana 27 y 28 de abril de 2005.

Consideraciones Finales

- Los factores y los referentes históricos se destacan al enfocarnos en el contexto actual: la flexibilidad de las elites y la derecha en Chile es un elemento relevante a considerar por los movimientos progresistas, no solo por el caso específico, sino por la necesidad de reconsiderar —desde la óptica progresista— la dialéctica y la capacidad de flexibilidad en la perspectiva de largo plazo que apunten a proyectos que consideren las necesidades económicas, sociales y políticas de las sociedades en su conjunto.
- En el terreno de la recuperación de las riquezas naturales, cabe recordar que la década de 1970 y la nacionalización del cobre por el gobierno de Salvador Allende, se inserta en la lógica de otras iniciativas similares en la época. Actualmente estamos frente a una agudización de la problemática asociada a los recursos naturales a nivel global, que se traduce en este continente en la acentuación de los intereses de los Estados Unidos en este terreno. Es el caso de los recursos energéticos (Venezuela, México, Colombia, Ecuador, Bolivia, etcétera), agua (Amazonas), entre otros.
- Los Estados Unidos recurre a un ya clásico *modus operandi*: iniciativas políticas, económicas, diplomáticas, de inteligencia y otras, que se ajustan flexiblemente caso a caso. Podríamos decir que, desde este punto de vista, Cuba es el caso más acabado de la aplicación de toda la gama de medidas, desde la desestabilización hasta las sanciones económicas.
- Parte de la lógica de la aplicación de medidas desestabilizadoras es la “negación plausible”. Esta lógica está constantemente presente en todo el accionar estadounidense.
- En el caso de Chile, los *National Intelligence Estimates* eran realizados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otras agencias y entre 1969 y 1973 ofrecen pocas evaluaciones explícitas de la amenaza que representaba el Chile de Salvador Allende. Un Memorándum de Inteligencia del 4 de noviembre de 1970 concluía que los Estados Unidos no tenía intereses vitales dentro de Chile, que el balance militar global de poder no iba a ser significativamente alterado por el régimen de Allende y que su victoria no representaba una amenaza a la paz en la región. Se instauró el uso de canales alternativos porque informes de la CIA no eran lo suficientemente catastróficos en cuanto a la elección de Allende. Como suele suceder en la política exterior de los Estados Unidos, esto reflejaba contradicciones burocráticas (que hoy están también presentes en la política hacia Venezuela y otros). Este es un referente importante a

tener en cuenta para la “construcción de caso” y a la tergiversación de la información de inteligencia, cuestión que está presente también en los argumentos utilizados por los Estados Unidos para la guerra en Irak.³⁷

- En lo que se refiere a los Estados Unidos y los actuales procesos emergentes, en el caso de Bolivia, las declaraciones del embajador de los Estados Unidos con respecto a Evo Morales, que solo contribuyeron a incrementar su popularidad, cabe recordar lo que decía en los 1970 el embajador Edward Korry con respecto a la campaña de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), esto es, que era tan burda que resultaba contraproducente que, de hecho, favorecía a Salvador Allende. En este sentido, es necesario subrayar que ambos procesos electorales se desarrollaron en un marco de desestabilización a pesar de lo cual triunfó la voluntad popular.
- La construcción del futuro de América Latina toda pasa por los referentes de la historia y de la cultura política de cada país y la figura de Salvador Allende se proyecta como una de dignidad y consecuencia que se inscribe en el marco de las luchas emancipatorias del continente.
- No se puede renunciar al sueño hacia adelante. Hay que repensar la realidad para acceder a un mundo diferente, de modo que. “...repensar América Latina es repensar el planeta pero desde su periferia, desde donde vivimos”.³⁸ En el contexto de este fin de siglo en el que es primordial el rescate de la memoria histórica de los pueblos, de los valores, el rescate de los espacios de participación comprimidos por el sistema neoliberal, el replanteo del modelo mismo del desarrollo, la equidad y la justicia social.

³⁷ Ver Isabel Jaramillo, “Seguridad Internacional y Percepciones de Amenaza”, *Seguridad y Defensa* No 2, CEID, Cuba, agosto de 2003.

³⁸ Francisco Delich, *Repensar América Latina*, Gedisa Editorial. Argentina, 2004.